JUZGADO NOVENO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
Bogotá, D. C., abril veintiuno (21) de dos mil veinte (2020).-

REF. FALLO DE TUTELA – PRIMERA INSTANCIA

RAD. 110013103 009 2020 00129 00

ACCIONANTE: JAIRO ENRIQUE ESPINEL SÁNCHEZ
ACCIONADA: IGAC.

ANTECEDENTES

JAIRO ENRIQUE ESPINEL SÁNCHEZ promovió acción de tutela contra el INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI al considerar vulnerado su derecho al debido proceso y defensa; motivo por el que, en sede de tutela, pretende que el Juez Constitucional le ordene a la entidad accionada que asigne un perito evaluador para que se notifique en el proceso de Expropiación 2007-00601 y emita su experticia en un término no mayor a cinco días.

En resumen, la *causa petendi* se concretó así: el accionante funge como demandado dentro del proceso de Expropiación 2007-00601, que inicialmente se tramitó ante el JUZGADO 13 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ y, actualmente, en el JUZGADO 48 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, Despacho que, a petición de parte, en múltiples oportunidades ha designado peritos de la lista que remite el IGAC; sin embargo, los expertos declinan argumentando inexistencia de relación contractual frente a la entidad accionada o, que tienen más de cinco procesos bajo su custodia.

Agregó que han transcurrido dos años y cinco meses, en los que ha solicitado siete veces que se practique el avalúo requerido y la entrega de la indemnización por expropiación ya que esta es del orden legal.

LA ACTUACIÓN SURTIDA

Este juzgado avocó conocimiento de la solicitud de amparo y ordenó notificar a la entidad accionada, la cual se pronunció en los siguientes términos:

Alegó improcedencia de la protección constitucional por no cumplirse con los requisitos generales de procedencia como el de subsidiariedad; máxime cuando no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable.

De otra parte, este Despacho judicial ordenó oficiarle al JUZGADO 48 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ para que indicara si en ese estrado cursa el proceso al que hace referencia el accionante e informara sobre la ausencia de respuesta de parte de la accionada a la orden judicial, cuya resolución se persigue mediante esta acción.

El Juzgado en comento afirmó que actualmente tiene el conocimiento del proceso de Expropiación y, que de forma oportuna ha resuelto las solicitudes de relevo formuladas frente a la falta de aceptación y posesión de los peritos designados.

CONSIDERACIONES

La doctrina constitucional ha establecido que la acción de tutela es una herramienta procesal preferente, informal, sumaria y expedita que pretende el amparo de los derechos fundamentales de una persona que se ven vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o particular. No obstante, para que la solicitud de amparo proceda, se requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- i)* Legitimación por activa.
- ii)* Legitimación por pasiva.
- iii)* Trascendencia iusfundamental del asunto.
- iv)* Agotamiento de los mecanismos judiciales disponibles, salvo la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
- v)* La evidente afectación actual de un derecho fundamental.

Con referencia a la evidente afectación actual de un derecho fundamental, la jurisprudencia establece que debe existir un término razonable posterior a la ocurrencia de los hechos para que los ciudadanos recurran a la tutela como mecanismo para garantizar la protección inmediata de sus derechos fundamentales¹.

Sin embargo, el actor de esta causa solicitó la protección constitucional después de transcurrir un lapso de tiempo prolongado, según su afirmación, de más de dos años y cinco meses, entre el presunto hecho generador de la vulneración y la petición de amparo, lo cual se traduce en que la solución que se reclama no se requiere con prontitud, que es el caso para el que está reservado el mecanismo preferente y sumario de la tutela.

Adicionalmente, el extremo interesado tiene la carga procesal de acreditar la existencia de la causa justificativa por la que tardó aquél periodo sin promover la acción; no obstante, omitió pronunciarse al respecto.

En igual sentido se concluye al estudiar una posible procedencia transitoria del mecanismo de amparo constitucional, puesto que no se probó la presencia de un perjuicio irremediable, en el entendido que el perjuicio debe ser inminente, las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes y, además, no basta cualquier perjuicio, puesto que se requiere que este sea grave.

A ello se agrega, que la codificación procesal civil, disponga no solo en la regla general de la prueba pericial, sino también en aquella aplicable a los procesos de expropiación, que sea el interesado en la práctica de la experticia, quien la pueda aportar para acreditar su alegación (arts. 226 y ss y, 399 del C.G del P.), por lo que, en razón al principio de subsidiariedad que asimismo, caracteriza la acción de tutela, el pedido del actor constitucional en este evento también resulta inviable.

¹ Sentencia SU-961 de 1999.

Puestas de esta forma las cosas, se denegará por improcedente la protección constitucional deprecada por el accionante, señor JAIRO ENRIQUE ESPINEL SÁNCHEZ, ya que la actuación no cumple con los requisitos generales de procedencia, ni se acreditó excepción alguna frente a estos para considerar la prosperidad de sus pretensiones.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO NOVENO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ**, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero: **DENEGAR** la protección constitucional deprecada por el señor JAIRO ENRIQUE ESPINEL SÁNCHEZ, de conformidad con las consideraciones anteriormente expuestas.

Segundo: De no impugnarse este proveído, **REMÍTASE** el expediente a la Corte Constitucional, para lo de su competencia.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

LUISA MYRIAM LIZARAZO RICAURTE
JUEZ

(110013103 009 2020 00129 00)